**En México, ¿Un nuevo amanecer para los sindicatos independientes?**

David Bacon, NACLA Report on the Americas, 7/2019,

<https://davidbaconrealitycheck.blogspot.com/>

En su discurso ante el Congreso mexicano durante su toma de posesión el 1 de diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que 36 años de reformas económicas neoliberales habían reducido el poder adquisitivo del salario mínimo de México (ahora con un valor de aproximadamente $ 4 dólares por día) en un 60 por ciento. "La política económica neoliberal ha sido un desastre, una calamidad para la vida pública del país", acusó. "Durante el período neoliberal nos convertimos en el país con la segunda tasa de migración más alta del mundo: 24 millones de mexicanos, viviendo y trabajando en los Estados Unidos ... Dejaremos de lado la hipocresía neoliberal. Los nacidos pobres no serán condenados a morir pobres".

A fines de abril de este año, el nuevo gobierno dio un paso para deshacer esta herencia neoliberal, cuando la Cámara de Diputados y luego el Senado aprobaron un proyecto de ley de reforma laboral propuesto por el partido de López Obrador, el Movimiento Nacional de Regeneración (MORENA).

Los trabajadores y los sindicatos independientes y progresistas en México tienen grandes esperanzas de que el nuevo gobierno deshacerá muchas de las políticas que han inclinado el campo de juego económico y político bruscamente hacia las corporaciones. La reforma de la legislación laboral es solo uno de los componentes de dicho proceso, pero el debate en torno a ella destaca el grado en que las condiciones para los trabajadores y los sindicatos se han deteriorado en tres décadas, y su impaciencia por revertir el curso.

La nueva reforma laboral se ocupa principalmente de los derechos de los sindicatos y los trabajadores que los integran. Durante más de medio siglo, un conjunto de sindicatos establecidos y conservadores ("charros") han estado vinculados al gobierno y al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó durante la mayor parte de ese tiempo. A cambio del apoyo político, los líderes "charros" ocuparon cargos a veces de por vida, sin rendir cuentas a sus miembros. Las juntas laborales formadas por representantes de sindicatos conservadores, empleadores y un gobierno pro patronal hicieron extremadamente difícil que los trabajadores formaran organizaciones independientes. En miles de lugares de trabajo, los sindicatos y empleadores "charros" negociaron contratos secretos de "protección" que garantizaban la paz laboral. Cada vez que los trabajadores intentaban organizarse de manera independiente para ganar mejores salarios y condiciones, los empleadores generalmente alegaban que un sindicato de "protección" ya los representaba, lo que representaría un enorme obstáculo legal para los trabajadores en cualquier intento de establecer sus propios sindicatos.

Sin embargo, en el cuarto de siglo desde la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los sindicatos independientes y progresistas han crecido a pesar de los obstáculos. Mientras tanto, la fuerza de los antiguos sindicatos parece cada vez más hueca a medida que disminuye su membresía.

**Logros y límites de la nueva reforma laboral**

La reforma de la legislación laboral MORENA cambia drásticamente las prácticas de negociación colectiva y la vida sindical interna. Los líderes ahora deben ser elegidos por votación directa y secreta, haciéndolos más responsables ante los miembros. Los contratos deben ser públicos y los miembros deben tener derecho a votar sobre ellos. Los sindicatos que no cumplan perderán su estatus legal. Y los tribunales laborales, como parte del sistema judicial, reemplazarán a las antiguas juntas laborales pro-empresa. La ley cubre explícitamente a los trabajadores domésticos, pero no a los trabajadores agrícolas.

Los votos casi unánimes en ambas cámaras a favor de la reforma demostraron cuán gravemente los viejos sindicatos habían perdido el poder en las elecciones presidenciales de julio pasado. Carlos Aceves del Olmo, el jefe del sindicato "charro" más grande, la Confederación de Trabajadores de México (Confederación de Trabajadores Mexicanos, CTM) calificó la ley como "imposible de implementar". Él dijo enfurecido que la nueva Secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, era solo una marioneta de su padre Arturo Alcalde, uno de los abogados laborales más respetados de México. Estaba "ocultando la realidad" del presidente López Obrador, acusó Aceves.

Otro funcionario de la vieja línea, Rodolfo González Guzmán, de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores (CRT), de nombre similar, amenazó con que la nueva ley conduciría a la "fragmentación" del movimiento obrero. Pero un tercero, Isaías González, miembro de la Cámara de Diputados y líder de la Confederación Regional Obrera Mexicana (Confederación Revolucionaria de Trabajadores y Campesinos, CROM), admitió a regañadientes que "los tiempos han cambiado y los sindicatos ya no pueden oponerse a las elecciones libres".

Sin embargo, algunos sindicatos progresistas consideraron que la reforma no fue lo suficientemente lejos, en parte porque no revirtió un cambio fundamental en la legislación laboral mexicana realizada en 2012 bajo el entonces presidente Felipe Calderón. La reforma de 2012 permite a las empresas contratar o subcontratar trabajos, que anteriormente estaban prohibidos. Permite la terminación sin causa durante los primeros seis meses de trabajo de los trabajadores, y permite el trabajo a tiempo parcial y temporal y el pago por hora en lugar de las tarifas de un día.

"Todos los sindicatos independientes apoyan los cambios en la nueva ley MORENA, pero muchos dicen que no son suficientes", según Héctor de la Cueva, director del Centro Independiente de Investigación Laboral e Investigación Sindical (CILAS). Los críticos de la ley incluyen sindicatos para trabajadores telefónicos, trabajadores eléctricos y empleados de la Universidad Nacional Autónoma de México. "Los cambios se refieren a los derechos colectivos de los trabajadores", explica de la Cueva. "Pero en términos de sus derechos individuales, los trabajadores siguen siendo vulnerables. Los sindicatos argumentan que si no hay cambios en la legislación laboral de 2012, los derechos sindicales serán ser afectados también".

En solo un ejemplo de las consecuencias de la ley de 2012, Grupo México, una de las compañías mineras más grandes del mundo, pudo reemplazar a los huelguistas en la enorme mina Cananea en Sonora mediante la contratación de sus trabajos. Los trabajadores reemplazantes sin experiencia murieron en accidentes mineros y permitieron un derrame enorme de relaves mineros tóxicos en el río Sonora, contaminando comunidades y enfermando a los residentes. Sin embargo, el sindicato de mineros apoya la reforma de MORENA, en parte porque su líder, Napoleón Gómez Urrutia, fue elegido senador de MORENA.

En el momento de su aprobación, Arturo Alcalde calificó las reformas de 2012 como "una invitación abierta a los empleadores y un camino hacia un paraíso de despidos". La subcontratación prolifera. Solo en la Ciudad de México, el 22% de la fuerza laboral, o alrededor de 800,000 trabajadores, ahora están subcontratados.

Según Benedicto Martínez, copresidente de la federación sindical independiente, el Frente Auténtico del Trabajo, "La motivación del gobierno, asistido por sindicatos corporativos, fue alentar el despido de empleados de toda la vida, que podrían ser reemplazado por trabajadores subcontratados. Ahora hay compañías donde todos los trabajadores están subcontratados, que no tienen empleados propios. Las condiciones son muy bajas, apenas un poco por encima del mínimo legal y, a veces, por debajo". El FAT también apoya la reforma MORENA.

"El gobierno y el Congreso dicen que habrá otro período de discusión sobre la segunda etapa de la reforma, que comenzará en septiembre, pero nadie sabe realmente si esto sucederá", advirtió De la Cueva. "Las empresas están muy descontentas incluso con la reforma actual, por lo que realmente dependerá de lo que ocurra en la sociedad en general".

A otros sindicatos les gustaría abordar cuestiones adicionales. Los trabajadores universitarios, por ejemplo, no pueden organizar un sindicato nacional, por lo que cada uno de sus sindicatos está vinculado a una sola institución. En la Universidad Autónoma de México (UAM), los trabajadores habían estado en huelga durante casi tres meses a fines de abril. Las autoridades universitarias, aparentemente sin preocuparse por el nuevo ambiente pro-laboral, le dijeron al Sindicato de Trabajadores de la UAM (SITUAM) que pondrían su mejor oferta sobre la mesa, pero que no negociarían más.

Además, la nueva ley establece un período de cuatro años antes de que los tribunales laborales sustituyan a las antiguas juntas laborales. Durante ese período, un número creciente de trabajadores sin duda exigirá elecciones para sus líderes, y solicitarán el reconocimiento legal de nuevos sindicatos. En el futuro, la Secretaria de Trabajo, Luisa Alcalde, estableció el Consejo Coordinador de representantes de los organismos gubernamentales, incluidos los tribunales y otros, para planificar la implementación de la reforma de la legislación laboral. También creó una nueva agencia llamada Centro Nacional de Conciliación y Registro Sindical. Los viejos sindicatos de charros continúan sus protestas, y en Chihuahua la CTM acudió a los tribunales para obtener una orden para detener la implementación de la ley por completo.

Sin embargo, todavía no hay presupuesto para los nuevos tribunales, y establecerlos y capacitar a su personal será muy costoso. Como resultado, el presidente de AFL-CIO, Richard Trumka, se negó a apoyar las disposiciones laborales del nuevo Tratado Comercial de Estados Unidos, México y Canadá. Los "sindicatos falsos", acusó Trumka, han firmado 700,000 contratos de "protección". "Eso significa que tendrán que cambiar 175,000 [líderes] al año durante los cuatro años que se les ha otorgado en el acuerdo y tendrán que tener 175,000 elecciones", dijo al Club Económico de Washington. "Queremos ver su capacidad para hacer eso".

Es poco probable que todos los trabajadores bajo esos contratos soliciten esas elecciones de una vez. Pero la presión sobre los sindicatos "charros" está creciendo. "Hubo muchos puntos de negociación en las negociaciones comerciales [USMCA], pero uno de los más importantes fue la sección laboral", cree de la Cueva. "Eso hizo que los cambios fueran necesarios, el más básico de los cuales fue poner fin al sistema de sindicatos de empresa. La reforma actual tendrá un gran impacto. Un efecto será la democratización de los sindicatos 'charros', y los sindicatos independientes se están preparando para aprovechar la nueva situación. Será bueno para los sindicatos independientes y nuevos. Habrá una nueva ola de luchas de los trabajadores, de hecho, ya está sucediendo".

**Reformando las maquiladoras**

El propio López Obrador fue responsable de la primera ola de tales demandas, cuando en su discurso de inauguración prometió duplicar el salario mínimo en la frontera entre Estados Unidos y México. Manteniendo su palabra, el 1 de enero aumentó ese salario de 88.36 pesos (US$ 4.63) por día a 176.72 pesos (US$ 9.25) por día. Luego, en enero y febrero, tomando en serio la promesa, más de 40,000 de los 70,000 trabajadores de las maquiladoras en las plantas de Matamoros abandonaron sus trabajos exigiendo su cumplimiento.

Las maquiladoras son fábricas de propiedad extranjera que fabrican productos destinados a la venta en los Estados Unidos, producto de una política de desarrollo económico iniciada por el gobierno mexicano en 1964. La atracción para las empresas extranjeras ha sido un nivel salarial muy inferior al de los trabajadores, solo unas pocas millas al sur de los EEUU., y la aplicación laxa de las leyes ambientales y de protección de los trabajadores, lo que da lugar a una mayor rentabilidad para la fabricación. A lo largo de la frontera hoy, más de dos millones de trabajadores trabajan en estas fábricas.

En enero, los dueños de las fábricas de Matamoros declararon que no aumentarían los salarios de sus trabajadores porque ya estaban haciendo lo que López Obrador había ordenado. Según Juan Villafuerte Morales, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Industria Maquiladora, los trabajadores ganaban entre 156 y 177 pesos por día. El sindicato de Villafuerte es parte de la marca comunitaria. En la frontera, los sindicatos de la CTM han actuado como ejecutores laborales de la política gubernamental de utilizar salarios bajos para atraer inversión extranjera.

Sin embargo, Julia Quiñones, directora del Comité Fronterizo de Mujeres Trabajadoras en Ciudad Acuña, dice que los empleadores estaban jugando una mala pasada en la forma en que calculan los salarios. "El salario base en la mayoría de las maquiladoras es de 90-100 pesos. Pero los trabajadores también ganan una cantidad de bonos por productividad, asistencia, transporte y otras razones. Dependen completamente de estos bonos. Cuando los trabajadores dijeron que su salario base debería duplicarse, como prometió el gobierno, las compañías dijeron que eliminarían los bonos y el resultado sería el mismo que no aumentar los salarios".

La historia laboral única de Matamoros hizo improbable que los trabajadores aceptaran tales trucos. Los trabajadores mayores recuerdan la era anterior al TLCAN, cuando sus salarios eran mucho más altos, y cuando el sindicato CTM estaba dirigido por un líder más militante, Agapito González Cavazos. Desde fines de la década de 1950 hasta fines de la década de 1980, el período en el que la industria maquiladora creció rápidamente, el sindicato de maquiladoras Matamoros tuvo entre 50,000 y 60,000 miembros. En la década de 1970, cuando el salario mínimo nacional era de 140 pesos (entonces valía US$ 11.20), en Matamoros era de 198 pesos (US$ 15.84). En 1983, González negoció un famoso acuerdo con un aumento salarial del 43 por ciento y un acuerdo en el que a los trabajadores se les pagaba 56 horas de trabajo, pero solo trabajaban una semana de 40 horas.

González Cavazos se opuso a las reformas neoliberales del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, que incluían la privatización de las empresas nacionales, el fin de la reforma agraria y la preparación del terreno para el TLCAN. En febrero de 1992, cuando se finalizaron los términos del TLCAN, Salinas lo encarceló. En ese momento, González Cavazos estaba negociando contratos sindicales con 42 empresas, incluida General Motors. Tanto United Auto Workers como AFL-CIO en los Estados Unidos protestaron por su arresto

En la era del TLCAN que siguió, la oposición laboral se debilitó y los salarios cayeron drásticamente. En 1992, justo antes de que se ratificara el acuerdo, González Cavazos exigía el equivalente a US$ 19.50 por día. El salario mínimo de hoy, incluso después de ser duplicado por López Obrador, es de US$ 9.27. La semana laboral ha aumentado de 40 a 48 horas en la mayoría de las fábricas. Para empeorar las cosas, aunque los salarios de las maquiladoras de Matamoros no son los más bajos en México, el costo de vida en la frontera es mucho más alto que en el resto del país.

De hecho, el precio de muchas necesidades básicas es en realidad más alto en los supermercados en ciudades fronterizas mexicanas como Matamoros y Tijuana que al otro lado de la línea en Brownsville y San Diego. Una mujer en la línea de ensamblaje en Tijuana tiene que trabajar medio día para ganar lo suficiente para comprar un galón de leche. Los precios han aumentado rápidamente en Matamoros, según la oficina de Tamaulipas del Fiscal Federal de Asuntos del Consumidor de México. Una libra de chiles serranos ahora cuesta 55 pesos, más del salario de medio día a 88 pesos.

Delfina Martínez, una trabajadora de Trico Componentes, que fabrica autopartes para AutoZone y otros minoristas de EEUU, le dijo a la periodista Julia Le Duc del diario La Jornada de la Ciudad de México que se alegró mucho cuando se enteró del aumento prometido de salarios de López Obrador. Pero "entonces el delegado sindical nos dijo que no calificamos". En cambio, descubrió en su cheque de pago que la compañía había aumentado su salario en solo cinco pesos por día. Luego descubrió que tampoco pagaría el bono anual de 3.000 pesos. En lugar de ayudarla, el decreto federal que aumenta el salario mínimo "dio un pretexto a la fábrica para que no nos pagara lo que normalmente obtendríamos cada enero ... Fuimos al sindicato, y el sábado pusimos el rojo y el negro huelga banderas".

Los trabajadores de Matamoros organizaron huelgas salvajes para presionar a las fábricas a aumentar los salarios y el aguinaldo, un mes adicional de pago, que las compañías están obligadas por ley a darles trabajadores a fin de año. Pronto, el trabajo se detuvo en muchas plantas, especialmente en aquellas que producen autopartes para plantas de ensamblaje de EE. UU. Según la Asociación de maquiladoras Matamoros, las compañías perdieron $ 100 millones en los primeros diez días.

Miles de trabajadores marcharon por las calles de Matamoros en enero y febrero, y acusaron furiosamente a Villafuerte de ceder ante las demandas de la compañía. Muchos organizaron una red independiente, llamada Movimiento de Trabajadores de Matamoros. La marejada obligó a Villafuerte a anunciar una huelga oficial por un aumento del 20 por ciento en el pago, y un aumento en el bono de productividad de 3,500 pesos (aproximadamente US$ 175) anuales a 32,000 pesos (aproximadamente US$ 1600). El 24 de enero, los miembros del sindicato abandonaron las 45 fábricas cubiertas por su contrato con los dueños de las maquiladoras.

Rolando González Barron, líder de la asociación de empleadores, llamó a los trabajadores "ignorantes" y amenazó con despedirlos si participaban en huelgas. Los empleadores recalcitrantes atribuyeron el conflicto a Susana Prieto Terrazas, una abogada de Juárez que ayuda a los huelguistas y la llamó agitadora externa. Los empleadores también acusaron al sindicato de mineros de apoyar a los huelguistas. Sin embargo, en pocos días casi todos cedieron para que sus trabajadores regresaran a las líneas de montaje. Otro sindicato de la CTM también declaró una huelga y ganó aumentos.

Sin embargo, no fue una victoria total para los trabajadores. Hubo ataques violentos contra trabajadores en al menos tres fábricas en marzo. Coca-Cola despidió a muchos trabajadores y luego volvió a abrir su planta de embotellado después de haber sido golpeada durante 50 días.

La nueva reforma de la legislación laboral, por lo tanto, puede enfrentar algunas de sus primeras pruebas en Matamoros, en elecciones para cargos en los sindicatos de la CTM. De hecho, las elecciones de maquiladoras tienen una historia violenta. Hace veinticinco años, cuando Martha Ojeda se postuló para presidenta del local de CTM en la enorme planta de Sony en Nuevo Laredo, los funcionarios de CTM manipularon el proceso. Los trabajadores salieron de la planta en señal de protesta, y fueron golpeados y expulsados ​​de las puertas con mangueras contra incendios. Los trabajadores pasaron de contrabando a Ojeda a través de la frontera hacia Texas para escapar del arresto. Más tarde se convirtió en directora de la Coalición por la Justicia en las Maquiladoras, que desde entonces ha ayudado a los trabajadores en muchos esfuerzos de organización posteriores.

En 2015, miles de trabajadores agrícolas se declararon en huelga contra empresas estadounidenses en Baja California. En respuesta, la policía disparó contra multitudes y barrios de trabajadores aterrorizados donde vivían los trabajadores. Sin embargo, en lugar de reconocer el nuevo sindicato independiente de trabajadores, los productores firmaron contratos de "protección" con la CTM, certificados por la junta laboral local. Los huelguistas estaban en la lista negra. Más tarde, ese mismo año, los trabajadores intentaron registrar un sindicato independiente en cuatro fábricas en Ciudad Juárez. Unos 120 trabajadores que fabricaban cartuchos de tinta para Lexmark fueron despedidos, al igual que otros 170 en ADC Commscope, y muchos más en Foxconn y Eaton.

En noviembre pasado, los trabajadores se preparaban para votar en el sindicato de mineros como su representante en la planta gigante de arneses de cables PKC en Ciudad Acuña, solo dos días antes de que López Obrador asumiera el cargo. Los manifestantes de la CTM entraron a las instalaciones gritando "¡Mineros Afuera!" [¡Fuera la Unión de Mineros!] Volcaron las urnas, cancelaron las elecciones y golpearon a los representantes de los mineros. Los mineros ganaron una elección en la fábrica de Teksid en Monclova, pero la compañía se negó a negociar y en abril despidió a 176 miembros del sindicato.

"Hay mucha resistencia a la nueva reforma", dice de la Cueva. "En una lucha reciente en una fábrica de neumáticos en Monterrey, los pistoleros llegaron para asustar a los trabajadores. Todavía hay bandas de golpeadores [manifestantes pagados que golpean a la gente] que aparecen durante los conflictos laborales. No está claro que el gobierno pueda detener a los mafiosos".

La situación en todas partes en la frontera está cambiando rápidamente, en parte debido a las crecientes expectativas. El gobierno de López Obrador y el Secretario de Trabajo, Alcalde, ahora deben asegurarse de que la ley evite que se repitan esos abusos. Quiñones siente que la administración López Obrador tardó en apoyar a los trabajadores en las calles de Matamoros. "Esperaba más", dijo. "Los trabajadores están cansados ​​del abuso y la explotación, y si pueden ver alguna esperanza de cambio, actuarán".

**Reforma de la educación**

Junto con la nueva ley laboral y las reformas al salario mínimo, López Obrador también se movió para cambiar otra reforma promulgada por sus predecesores: la reforma educativa que exigía pruebas estandarizadas para los estudiantes, y también pruebas y despidos de maestros. Esa reforma fue combatida por los maestros durante muchos años en huelgas masivas de maestros. La represión gubernamental finalmente culminó con una masacre en Nochixtlán, Oaxaca, en junio de 2016, en la que nueve policías federales y estatales dispararon a tiros.

La desaparición y asesinato de 43 estudiantes de la escuela de formación de maestros de Ayotzinapa en septiembre de 2014 también estuvo relacionada con el programa de reforma educativa corporativa. Su escuela tenía fama de producir maestros radicales, al igual que muchas escuelas rurales de capacitación como esta, que se establecieron a raíz de la Revolución Mexicana. Sus estudiantes a menudo provenían de algunas de las familias más pobres del campo. Claudio X. González Guajardo, cofundador de la Fundación Televisa y el lobby de la reforma educativa corporativa de Mexicanos Primeros calificó a las escuelas de capacitación como "un enjambre de política y gritos" y exigió que el gobierno las reemplace con instituciones privadas. Después del discurso inaugural de López Obrador, González tuiteó: "AMLO: contra el mercado libre, contra la reforma energética, una visión retrógrada, estatista, intervencionista y estancada. Los mercados reaccionarán negativamente. Nos irá muy mal, muy mal. Vergüenza."

En su discurso, López Obrador había prometido: "La llamada reforma educativa se cancelará, el derecho a la educación gratuita en el Artículo 3 de la Constitución se garantizará en todos los niveles de escolaridad, y el gobierno nunca más volverá a ofender a los maestros, la desaparición de la juventud de Ayotzinapa será investigada a fondo; se conocerá la verdad y los responsables serán castigados". En reuniones con el grupo nacional de docentes democráticos, también prometió elecciones libres en su sindicato, el más grande de América Latina. Eliminar el grupo autoritario que ha mantenido el poder en la unión durante décadas podría cambiar el equilibrio entre la izquierda y la derecha en la política institucional de México.

Pero mientras la reforma laboral MORENA se extendió por el Congreso mexicano, la derogación de la reforma educativa neoliberal se descarriló en el Senado. López Obrador luego emitió un memorándum diciendo que la reforma educativa ya no estaría en vigencia, una medida inmediatamente cuestionada por los partidos conservadores que la aprobaron bajo la administración del ex presidente Peña Nieto.

Los sindicatos de docentes de Oaxaca y otros estados se retiraron de su campamento fuera de la Cámara de Diputados, pero luego organizaron grandes marchas del Primero de Mayo exigiendo que López Obrador cumpliera con su compromiso de anular la reforma educativa. Pedro Gómez Bamaca, del sindicato de docentes de Chiapas, pidió "la unidad que nos defienda de la continuación del modelo neoliberal". Acusó que los senadores de MORENA que no pudieron revocar la reforma en realidad votaron para aprobarla, cuando habían sido miembros del partido de Peña Nieto. "Ahora se pintan como MORENA, pero son las mismas personas", dijo Gómez con amargura. Será una batalla larga y dura, pero en Chiapas estamos listos para ello .

López Obrador condenó en su discurso de inauguración la forma en que el nivel de vida de los trabajadores se desplomó durante tres décadas, ya que el gobierno usó salarios bajos para atraer inversiones y estableció deliberadamente aumentos en el salario mínimo por debajo de la tasa de inflación. "En este período [neoliberal], el poder adquisitivo del salario mínimo se deterioró en un 60 por ciento, y el salario de los mexicanos se encuentra ahora entre los más bajos del planeta", acusó.

Si bien las crecientes expectativas crean una enorme presión para el cambio, revertir el deterioro de la tendencia de los derechos de los trabajadores en México no será fácil, como lo demostraron los eventos en Matamoros. "Es muy dudoso que los trabajadores puedan compensar las pérdidas salariales que han experimentado o los cambios en sus condiciones de trabajo", predice De la Cueva. Y a pesar de los pronunciamientos oficiales de sus partidarios, "no hay garantía de que T-Mex [el nuevo TLCAN] tenga algún impacto en esto".

Además de cumplir las promesas a los trabajadores, López Obrador cree que revertir la dirección neoliberal también requiere rescatar a las empresas nacionales. La Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, ahora proporciona energía a todo México después de que el ex presidente Calderón disolviera la Compañía de Energía y Luz de México Central para destruir su sindicato, los Trabajadores Eléctricos Mexicanos. Pero la CFE está cerca de la bancarrota, bajo el peso de contratos desfavorables y corruptos firmados con empresas extranjeras.

PEMEX, el monopolio petrolero nacional que contribuye a gran parte del presupuesto de México, también está en serios problemas financieros. La producción está disminuyendo. López Obrador prometió construir otra refinería para que México vuelva a ser autosuficiente en gasolina (ahora importa gas de los Estados Unidos) y para impulsar la producción de petróleo.

Ambas empresas fueron víctimas de décadas de acuerdos privados y rastrillos. "El sello distintivo del neoliberalismo es la corrupción", acusó López Obrador. "En las últimas tres décadas, las más altas autoridades se han dedicado a otorgar concesiones al territorio y transferir empresas y bienes públicos, incluso funciones del estado, a individuos nacionales y extranjeros ... El gobierno ya no facilitará el saqueo, y no ya no será un comité al servicio de una minoría rapaz ".

Los líderes del sindicato petrolero, uno de los pilares del antiguo PRI gobernante de México, administraban negocios que extraían dinero de la empresa matriz. En el espacio político abierto por las últimas elecciones y la reforma laboral, grupos de oposición están apareciendo en el sindicato. "Pero aún tiene un control muy real sobre los trabajadores", advierte de la Cueva. "Las corrientes democráticas no son fuertes, y algunos piensan que vincular a sus grupos con MORENA derrotará a los 'charros', pero no es tan fácil".

Mientras López Obrador busca el dinero necesario para lograr sus objetivos, su administración es vulnerable a la presión de los inversores que necesita. De la Cueva llama a la política de la administración un "equilibrio" entre el gran capital y los sindicatos. Y dado que la producción para la exportación es ahora la base de la economía, México depende de un flujo continuo de bienes que se mueven hacia el norte. Cuando el presidente de Estados Unidos, Trump, amenaza con cerrar la frontera, o incluso ralentizar el tráfico, la amenaza para la economía mexicana es real.

Algunas de las batallas laborales más grandes que la administración heredó de sus predecesores, por lo tanto, pueden no resolverse rápidamente. En Cananea, por ejemplo, donde un levantamiento de trabajadores anunció la próxima Revolución Mexicana en 1906, el sindicato minero ha estado en huelga contra el Grupo México durante una década. Los trabajadores claramente esperaban que con López Obrador en la presidencia y Gómez Urrutia, un senador de su estado de origen, la compañía se vería obligada a tomar una resolución. Las comunidades en el río Sonora, que fueron envenenadas por el derrame tóxico hace siete años, uno de los peores desastres ambientales en la historia de México, también esperaban que el gobierno finalmente se opusiera al Grupo México.

"Pero el gobierno no quiere un gran conflicto con corporaciones poderosas en este momento", dice de la Cueva. "Está haciendo un acto de equilibrio. Napoleón [Gómez Urrutia] está en el Senado, pero eso no significa que el gobierno apoyará a los mineros. Los eventos allí sucederán muy lentamente".

Los mineros no están dispuestos a esperar simplemente estos cambios. En los últimos meses, el sindicato organizó una nueva federación laboral, la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), con 150 sindicatos afiliados. Gómez Urrutia dice que la nueva federación no está dirigida a la CTM, pero algunos líderes de la CTM, acusa, dirigen sus sindicatos como su propiedad personal, en complicidad con los empleadores. Señala a los que enviaron a los hombres contratados para interrumpir las elecciones sindicales en PKC, o que proporcionaron a los rompehuelgas en Cananea.

El CIT une otras dos federaciones de sindicatos independientes. El Sindicato Nacional de Trabajadores (UNT) fue organizado en la década de 1990 por los trabajadores telefónicos, la FAT y otros sindicatos que se separaron de la antigua estructura laboral. Comenzó a proponer reformas a la legislación laboral como la aprobada recientemente por el Congreso hace más de dos décadas. Los Trabajadores Eléctricos Mexicanos (SME) organizaron el Nuevo Centro de Trabajadores en 2014, junto con el grupo progresivo del sindicato de maestros y el sindicato ahora en huelga en la Universidad Nacional Autónoma (SITUAM). También incluye la Confederación Nacional de Jubilados, la más izquierdista de las tres, y una de las cooperativas más antiguas y más grandes de México en la planta de embotellado de refrescos Pascual.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la UNT propuso recientemente una convención de las tres federaciones, no para fusionarse, sino para encontrar formas de trabajar juntos. Las tres apoyaron la elección de López Obrador, aunque a menudo a través del trabajo de sus miembros, más que a través del tipo de respaldo formal frecuente en los Estados Unidos. Sin embargo, en un grado u otro, todos sienten que la administración tiene una actitud fría hacia ellos. En parte, esto refleja una historia en la que los sindicatos "charros" estaban vinculados organizativamente al gobierno y al PRI, y los trabajadores tenían que pertenecer al PRI para poder trabajar. Los sindicatos progresistas no quieren volver a esos días, lo mismo que López Obrador.

"El gobierno no está prestando mucha atención a las organizaciones sociales como los sindicatos", explica de la Cueva. "La intención de López Obrador es ser el 'presidente del pueblo' directamente, en lugar de hacerlo a través de organizaciones intermediarias".

Sin embargo, a pesar de los desafíos, el subsecretario de Trabajo, Alfredo Domínguez Marrufo, cree que la administración y los sindicatos independientes comparten los mismos objetivos. "Hoy muchos trabajadores viven en la pobreza, con uno o dos dólares al día", dice. "Este es el problema fundamental. Pero no solo luchamos por un objetivo económico, no solo por salarios dignos, sino por la revitalización de la vida democrática de los trabajadores, de nuestros sindicatos y las organizaciones a las que pertenecemos".